



Just
governance
group

An informative bulletin by the Just Governance Group

Múltiples

Un boletín informativo del Grupo de Gobernanza y Justicia

No. 1 February 2007

Challenges for Human Rights Institutions in Latin America

No. 1 Febrero 2007

Retos para Instituciones de Derechos Humanos en América Latina

Índice

3 Educación en derechos humanos: desafío para contrarrestar prejuicios

4 Foto: Guillermo Roca

7 El Grupo

Contents

5 Human Rights Institutions and Conflict Management

6 Photo: Kimberly Inksater & Carmen Beatriz Ruiz

7 The Group

Just Governance Group

1276 Wellington Street, 2nd Floor

Ottawa, Canada K1Y 3A7

Tel: 613-729-5612

Fax: 613-729-1085

www.justgovernancegroup.org

info@justgovernancegroup.org

Introduction from the Editor

After working for six years as an independent consultant I decided to enter into an evaluation process of my consultancy services in various themes and in various countries. The observations of colleagues, clients and representatives of partner institutions, along with the innovative recommendations of the evaluator, inspired me to form a work collective with other professionals and organizations. The Just Governance Group is an opportunity to generate and apply theoretical and practical knowledge on governance issues within development scenarios in the Americas.

MÚLTIPLES is an opportunity for members of the Group, as well as others, to reflect and share their opinions on issues that are relevant to sustainable democratic development.

In this first bulletin, challenges common to public human rights institutions are briefly discussed. Carmen Beatriz Ruiz examines human rights education and I consider the functions of human rights protection and conflict management.

Your comments and contributions to MÚLTIPLES, in English or Spanish, are most welcome. Thank you for your interest in this new "multinational" initiative.

Kimberly Inksater

Introducción por la Editora

Después de trabajar durante seis años como consultora independiente decidí emprender un proceso de evaluación de mis servicios de consultoría, realizados hasta entonces, sobre varios temas y en varios países. Las observaciones de colegas, clientes y representantes de instituciones socias, junto con las innovadoras recomendaciones del evaluador, me inspiraron para formar un colectivo de trabajo con otros profesionales y organizaciones. El Grupo de Gobernanza y Justicia es una oportunidad para generar y aplicar conocimiento teórico y práctico sobre cuestiones de Gobernanza dentro de escenarios de desarrollo en las Américas.

MÚLTIPLES es un espacio - tanto para los miembros del Grupo como para otras personas - para reflejar y compartir opiniones sobre aspectos relevantes al desarrollo democrático sostenible.

En este primer boletín se abordan brevemente los retos comunes para instituciones públicas de derechos humanos. Carmen Beatriz Ruiz examina la educación sobre derechos humanos y yo reflexiono sobre las funciones de protección de los derechos humanos y la administración de conflictos.

Sus comentarios y contribuciones a MÚLTIPLES, en inglés o el español, son bienvenidas. Gracias por su interés a esta nueva iniciativa "multinacional".

Kimberly Inksater

Educación en derechos humanos: desafío para contrarrestar prejuicios

Por Carmen Beatriz Ruiz

“Defensores de los delincuentes”, “Izquierdos Humanos”. Muchas veces quienes trabajamos en el área de los derechos humanos hemos escuchados frases despectivas o ambiguas como esas. ¿De dónde viene esa percepción y qué puede hacerse desde el trabajo de las instituciones públicas en derechos humanos?

La fuente de esas frases podría ser en primer lugar la desinformación sobre la misión y competencias de las Defensorías del Pueblo, Ombudsman o Comisiones de Derechos Humanos, en amplios sectores de la población, en general y en particular de funcionarios públicos y líderes de opinión. Otras fuentes podrían ser el prejuicio respecto a que las y los infractores de las leyes no merecen la garantía de sus derechos, el desgaste de la tolerancia social de la población en situaciones de conflicto.

Por ejemplo, hace algunas semanas, en Bolivia, se difundió la noticia de que se estaba discutiendo en el Parlamento reformas a la Ley de Ejecución de Penas, proponiendo la implementación de ciertos beneficios para la población penitenciaria que cumpliera con requisitos de buena conducta, como la posibilidad de estudiar o trabajar, la disminución de la pena o la opción de extramuros y libertad condicional.

La noticia provocó una gran reacción pública de la mayoría de los medios de comunicación, implicando que, de adoptarse esas medidas, crecería la inseguridad ciudadana por efecto de la delincuencia. Otras opiniones, aún más conservadoras, expresaban que era inadmisible que quienes habían infringido la ley tuvieran esas consideraciones.

Sobre la Autora

Carmen Beatriz Ruiz es especialista en educación y comunicación sobre derechos humanos. Trabaja como una consultora asociada del Grupo de Gobernanza y Justicia y es directora ejecutiva del consorcio Apostamos por Bolivia, una asociación promoviendo la participación del campesinado y pueblos originarios en la reforma constitucional en Bolivia. Adjunta del Defensor del Pueblo en Bolivia entre 1998 y 2003, a cargo de la promoción y análisis de derechos humanos, la Sra. Ruiz diseñó e implementó campañas nacionales de educación pública, entrenamiento sobre derechos humanos a funcionarios públicos y programas sociales de verificación, en asociación con organizaciones que representan a grupos vulnerables en Bolivia.

Correo electrónico: cb.ruiz@justgovernancegroup.org

Esa es una situación perfectamente adecuada para que la Defensoría del Pueblo (de Bolivia o de cualquier otro país) ejerza una intervención de pedagogía social, es decir, de información educativa hacia la población, explicando el alcance de los derechos de la población penitenciaria y la necesidad de ofrecerle posibilidades de re inserción en la sociedad.

La información pública y la educación en materia de derechos humanos son competencias que tiene la mayoría de las Defensorías del Pueblo de América Latina; y las ejercen con distinto grado de expansión y eficacia, según los recursos humanos y económicos de que disponen. Aunque se considera que son competencias importantes para la misión de defensa de los derechos humanos de las personas, la mayoría de las veces se las asume como complementarias y de apoyo, no así como parte de la propia misión.

Sin embargo, en nuestras sociedades, que están construyendo trabajosamente sus institucionalidades democráticas, la información y educación en derechos humanos son acciones estratégicas fundamentales, cuyos principales resultados pueden ser visibles en la prevención de situaciones de violación de los derechos, en mayor disponibilidad de los/las funcionarios públicos para colaborar con los derechos humanos y en el aumento de la población dispuesta a reclamar y exigir sus derechos.

Respecto al ejemplo planteado, la Defensoría podría haber realizado diversas acciones: desde conferencias, debates y artículos a través de medios masivos para explicar pedagógicamente su posición respecto a la reforma legal; mesas de trabajo con los sectores más recalcitrantes en contra (medios de comunicación, operadores de justicia), hasta una mini campaña comunicacional dando cifras de resultados positivos de reinserción social de población carcelaria que haya accedido a los beneficios planteados en la reforma y mostrando testimonios personales de quienes hayan pasado por esa situación.

Para difundir y cambiar actitudes por medio de la educación estas instituciones públicas en derechos humanos deben coordinar ampliamente con aliados estratégicos, tales como organizaciones sociales, centros universitarios, entre otras entidades cuyos propósitos y posicionamiento social puedan amplificar los mensajes para contrarrestar los perjuicios comunes que inhiben el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos.

La Paz, Bolivia, diciembre de 2006

El Grupo y Educación en Derechos Humanos



Guillermo Roca, miembro del Grupo, facilitando una discusión en Guatemala en noviembre de 2006 para la planificación de la próxima etapa del proyecto de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación de los Derechos Humanos en Centro América.

El Grupo de Gobernanza y Justicia fue contratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia entre octubre y noviembre 2006 para facilitar un proceso de planificación participativa para la próxima fase de un proyecto de educación en derechos humanos en Honduras y Guatemala. El Gobierno de Finlandia apoya a programas formales y no formales en derechos humanos en estos países dentro el Proyecto de Apoyo a la Educación, Capacitación e Investigación de los Derechos Humanos. El proyecto apoya, entre varias iniciativas, a una maestría en educación en derechos humanos en la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán de Honduras. Ver su primera convocatoria: <http://postgrado.upnfm.edu.hn/index.php?option=content&task=view&id=28>

Visite nuestra página web:
www.justgovernancegroup.org

Human Rights Institutions and Conflict Management

By Kimberly Inksater

Some academics have suggested that human rights advocates and conflict resolution practitioners use contradictory practices that frustrate each others' goals even though the final objective of ending or limiting violent conflict is shared.¹ This position suggests, for example, that mediators seek a peaceful resolution to a conflict at the expense of legal remedies for human rights abuses. Impunity for human rights violations may be tolerated in order to achieve an agreement to end a crisis.

Human rights institutions in Latin America regularly act within this alleged contradiction to promote respect for human rights and to facilitate conflict resolution. While it may be a challenge to balance the objectives associated with the two actions it is not necessarily a contradiction.

The Human Rights Ombudsman offices in countries such as Peru, Colombia and Guatemala have played important roles during armed conflict and/or post-conflict democratic transitions. In Bolivia, marked by political and social conflict in the last several years, the Ombudsman has periodically assessed its role related to conflict. Initially it was an active arbitrator between parties but more recently has redefined its role as facilitator in order to promote dialogue mechanisms that have the purpose of preventing human rights violations. Neither the Constitutions of these countries nor the constituent legislation of the Ombudsman offices grant them specific function of conflict resolution. However, this conflict management function rests in the institutions' mandates to promote, protect and defend the rights of all persons and groups, especially the rights of the most vulnerable, and to monitor the public administration's respect for human rights.

Tension between individuals and groups will naturally arise in an emerging and diverse democratic society. Civil, political, social, economic, cultural and collective human rights guarantees will therefore come into conflict with one and other in this complex environment.

In order to address human rights tensions in conflict situations human rights institutions need to develop a variety of conflict management capacities. Conflict prevention activities vary from statistical early warning mechanisms to broad based and multidisciplinary analysis. Both approaches offer decision-makers valuable information on which to ➤

¹ E. Lutz, E. Babbitt & H. Hannum, "Human Rights and Conflict Resolution from the Practitioners' Perspectives" 27•SPG Fletcher F World Aff. 173.

base strategic decisions to prevent or resolve human rights violations and conflict.

Statistical measurement that assesses the degree of respect for individual and collective human rights guarantees has, to date, focused on civil and political rights at a very general level (eg. Freedom House, Transparency International) at a very general level that may not address specific in-country contexts. Efforts to measure social, economic, cultural and collective rights are at the preliminary stage.

A combined statistical and analytical approach to human rights and conflict monitoring is a more practical and contextual approach for human rights institutions. First, the complaint management systems in human rights institutions provide decision makers with a statistical source of information that provides partial but important data on the rights violated, institutions most frequently contravening rights guarantees and characteristics of complainants. Comprehensive conflict analysis and conflict impact assessment tools that facilitate the understanding of causes, aggravating factors and actors at the local, sub-national or national levels are essential to ensure that the design and implementation of human rights protection and conflict prevention activities are appropriate to the actual scenario.

In Colombia, for example, the Human Rights Ombudsman monitors the risk of violations of civil and political human rights and international humanitarian law through an early warning system. This system is meant to alert state authorities and communities to the risk of violence so that preventative action can be taken. Another type of monitoring program in the “Defensoría del Pueblo” in Colombia measures public policy coherence with social, economic and cultural rights obligations.

Rights monitoring and conflict assessment instruments can be effective management tools but only to the extent that they are systematically and consistently applied and institutional managers act promptly to galvanize state action and influence conflict actors and peace promoters. Facilitating dialogue as a conflict resolution technique is not contradictory to the promotion and protection of human rights; rather it is a strategic and preventative approach that advances a culture of respect for human rights.

Ottawa, Canada, January 2007

Kimberly Inksater and Carmen Beatriz Ruiz, in Colombia at the Defensoría del Pueblo in May 2006.

Useful links:

Monitoring social and economic rights:
Centre for Economic and Social Rights: <http://cesr.org/about/methodology>

Defensoría del Pueblo, Colombia: http://www.defensoria.org.co/?_s=d3

Monitoring civil and political rights:
Defensoría del Pueblo, Colombia: SAT • http://www.defensoria.org.co/?_s=sat

Conflict management tools:
Conflict Prevention and Post-Conflict Reconstruction Network <http://cpr.web.cern.ch/cpr/compendium/default.asp>

About the author

Kimberly Inksater is the director of the Just Governance Group and has worked with development programs to strengthen human rights institutions in Latin America, particularly in the Andean Region. Kimberly has also conducted country specific conflict analysis (Colombia and Bolivia) and prepared conflict assessment tools for the Canadian International Development Agency in order to support program development and management. She sits on the Scientific Committee of the Fragile States Project at Carleton University (see <http://www.carleton.ca/cifp/>) and has written various papers on the application of human rights and humanitarian law in situations of intra-state conflict.

E-mail: kj.inksater@justgovernancegroup.org



EL GROUP

Misión

La misión del **Grupo de Gobernanza y Justicia** es influir y contribuir al desarrollo de sociedades más justas, mediante la aplicación de conocimientos prácticos y teóricos de excelencia a iniciativas relacionadas con gobernanza y justicia.

El Grupo de Gobernanza y Justicia cree que una sociedad justa se caracteriza por los grados de:

- Respeto por los derechos humanos
- Respeto por la aplicación de la ley
- Participación auténtica e inclusión
- Diálogo constructivo inter-cultural e inter-sectorial
- Compromiso con la democracia participativa
- Respeto por la diversidad y el pluralismo
- Distribución equitativa de la riqueza y oportunidades para la participación económica

Visión

El Grupo de Gobernanza y Justicia es reconocido internacionalmente por su excelencia en servicios de consultoría y desarrollo de iniciativas relacionadas con la gobernanza y justicia. Estos servicios e iniciativas se basan en amplias investigaciones y análisis que toman en cuenta contextos políticos, sociales, culturales y económicos de la comunidad, el país o la región correspondiente.

Áreas de Conocimiento

- Derechos Humanos
- Desarrollo Democracia y Diversidad
- Análisis, Gestión y Prevención de Conflictos
- Sistemas de Justicia
- Gestión institucional del sector público y organizaciones de la sociedad civil

Modalidades de Trabajo

- Consultorías para agencias de cooperación
- Asesoramiento para organizaciones y instituciones nacionales y locales
- Iniciativas propias del Grupo que generarán buenas prácticas en Gobernanza

THE GROUP

Mission

The mission of the **Just Governance Group** is to influence and contribute to the development of “just societies” by applying sound theoretical and practical knowledge in governance and justice initiatives internationally.

The Just Governance Group believes that a just society is characterized by its degree of:

- Respect for human rights
- Respect for the rule of law
- Participation and inclusion
- Gender equality
- Constructive dialogue
- Commitment to participatory democracy
- Respect for difference and pluralism
- Equitable wealth distribution and opportunities for economic participation

Vision

The Just Governance Group is recognized internationally for excellence in consulting services and development initiatives related to good governance. These services and initiatives are based on comprehensive research and analysis that take into account the political, social, cultural and economic context in the country or region of focus.

Governance Knowledge Areas

- Human Rights
- Democratic Development and Diversity
- Conflict Analysis, Management and Prevention
- Legal Systems: State and Community Justice
- Institutional Management in the Public Sector and in Civil Society

Work Modalities

- Consultancies for cooperation agencies
- Advisory services to national and local organizations and institutions
- Initiatives designed and implemented by the Group to generate best practices in governance

Membresía

El Grupo de Gobernanza y Justicia es una red en crecimiento de profesionales en Gobernanza de varias regiones en las Américas, incluyendo la Región Andina, Centroamérica y Canadá. Los miembros del Grupo fueron invitados por su directora para participar en este proceso asociativo e innovador en base a la demostración de:

- conocimiento temático superior en áreas de especialización
- mejores prácticas en servicios de consultoría
- calidad de productos
- trabajo de equipo
- relaciones equitativas de género
- reflexión crítica y crecimiento profesional
- compromiso con la misión y objetivos del JGG

Miembros Individuales

	Edgar Ardila, colombiano
	Luis David Grajeda, guatemalteco
	Kimberly Inksater, canadiense
	Guillermo Roca, boliviano
	Carmen Beatriz Ruiz, boliviana
	Florian Soria, boliviana

Miembros Institucionales

Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia

Red de Justicia Comunitaria y Administración de Conflicto de Colombia

Membership

The JGG is a growing network of governance professionals from various regions in the Americas, including the Andean Region, Central America and Canada. Members of the JGG are invited by its director to participate in this associative and innovative process based on their demonstration of:

- superior thematic knowledge in areas of specialization
- best practices in consultancy services
- quality products
- team work
- equitable gender relations
- critical reflection and professional growth
- commitment to the JGG mission and objectives

Members

	Edgar Ardila, Colombian
	Luis David Grajeda, Guatemalan
	Kimberly Inksater, Canadian
	Guillermo Roca, Bolivian
	Carmen Beatriz Ruiz, Bolivian
	Florian Soria, Bolivian

Institutional Members

Community Justice School of the National University of Colombia

Community Justice and Conflict Management Network of Colombia

Visite nuestra página web: www.justgovernancegroup.org